

Miriam Kornblith

Elecciones y referendos en Venezuela: “¿Quién le teme al soberano?”

1. Introducción

A partir de 1958 se instauró en Venezuela un orden pluralista, caracterizado como el “sistema populista de conciliación de élites” (Rey 1989), o como la “democracia puntofijista” en alusión al Pacto de Punto Fijo suscrito en octubre de 1958 por los partidos AD, COPEI y URD. En sus primeras décadas, este orden dio lugar a la estabilidad política, al consenso interélites, a la alternabilidad democrática y a la incorporación de la población a los beneficios socioeconómicos del modelo de desarrollo. No obstante, desde finales de los años 80 el país entró en una etapa de inestabilidad, tensiones y cambios, tanto en el ámbito socioeconómico como en el político e institucional, que se ha prolongado hasta el presente. Los últimos años de esta fase, correspondientes al período presidencial de Hugo Chávez (1999-2003), han estado marcados por la confrontación y el conflicto provocado por el intento de “refundar la República”, a partir de la implantación de reglas, instituciones y actores distintos e incluso contrapuestos a aquellos que articularon a la sociedad venezolana a partir de 1958.

Las tensiones y cambios experimentados por la sociedad venezolana se expresaron consistentemente en comportamientos y resultados electorales. Desde 1958 hasta el presente en Venezuela ha habido 20 procesos comiciales de carácter nacional.¹ En este trabajo tratare-

¹ Las elecciones presidenciales y de todas las autoridades legislativas en los años 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993 y las elecciones parlamentarias y de algunas autoridades regionales en noviembre de 1998 y las presidenciales de 1998. Las elecciones municipales de 1979 y 1984. Las elecciones de autoridades regionales en 1989, 1992, 1995. Los 3 procesos comiciales asociados con la promulgación de la Constitución de 1999: referendo nacional, elección de representantes a la Asamblea Constituyente y aprobación del proyecto de Constitución. Elecciones presidenciales, parlamentarias y algunas autoridades regionales en julio 2000 y elección de autoridades municipales y referendo sindical en diciembre 2000. Entre las experiencias frustradas se cuenta la fallida megaelección de mayo

mos de mostrar la manera en que los procesos comiciales ocurridos entre 1998 y 2000 sirvieron para expresar las preferencias colectivas y reflejaron los cambios que se fueron operando en las mismas, y hasta qué punto los mecanismos de representación existentes tradujeron adecuadamente dichas preferencias y sus cambios. Pero también examinaremos las enormes dificultades que está confrontando la sociedad venezolana en la actualidad, para volver a traducir adecuadamente sus preferencias a través de mecanismos electorales, que permitan adecuar los cambios en el ánimo colectivo en nuevas correlaciones de fuerza, más cónsonas con las actuales preferencias, luego de 5 años de ejercicio gubernamental del presidente Chávez y de su coalición. Esos esfuerzos se han expresado recientemente en la promoción del referendo revocatorio presidencial como mecanismo institucional para promover la salida de Chávez del poder.

Partimos del supuesto de que un ajuste apropiado entre las preferencias colectivas y las autoridades electas y sus decisiones produce una mayor satisfacción con el sistema político y sus productos; por el contrario, si dicha relación se distorsiona o los esquemas de representación no son capaces de recoger con fidelidad las preferencias y expectativas colectivas, se produce una desafección respecto del sistema político y el rechazo a su liderazgo. En las páginas que siguen examinaremos esta dinámica a la luz de los resultados de la variedad de comicios ocurridos entre 1989 y el año 2000, y los intentos por activar salidas electorales entre los años 2002 y 2003.

2. Las elecciones de 1998, el ascenso de Chávez y el desplazamiento del liderazgo tradicional²

En materia político-electoral el año 1998 se caracterizó por la ocurrencia de situaciones inéditas y por importantes transformaciones en la organización de los comicios, en la dinámica partidista y de las candidaturas del proceso electoral y en los resultados que emergieron del mismo.

Uno de los cambios más importantes fue la conformación del llamado Polo Patriótico, alianza partidista estructurada en torno a la can-

2000 y el truncado referendo consultivo previsto para febrero 2003, y el rechazo a la solicitud de referendo revocatorio presidencial de septiembre de 2003.

2 Las páginas que siguen se apoyan ampliamente en Kornblith (2003b; 2003c).

didatura de Hugo Chávez. Como es bien conocido, el ingreso de Chávez al escenario público venezolano ocurrió a raíz del fracasado intento golpista del 4 de febrero de 1992. Si bien la asonada no logró sus objetivos desde el punto de vista militar, derivó en un éxito político para sus principales promotores, que rápidamente despertaron simpatías entre la población desencantada con el pobre rendimiento económico del país, acumulado desde inicios de los años 80 y con las carencias del liderazgo tradicional, tanto en el ámbito partidista, como en otras áreas del acontecer nacional. Los principales líderes del movimiento insurgente, los oficiales activos Hugo Chávez Frías, Francisco Javier Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos fueron juzgados y sentenciados a prisión, junto con un numeroso grupo de oficiales que participaron en la intentona.

A inicios del año 1994, bajo la presidencia de Caldera, los insurgentes fueron sobreseídos y dados de baja de las Fuerzas Armadas. Mientras que Arias Cárdenas y otros dirigentes optaron por participar en la vida democrática, al punto Arias incursionó exitosamente como candidato a gobernador en el estado Zulia en los comicios de 1995, logrando la victoria con el apoyo de La Causa Radical (LCR), Chávez se mantuvo en la línea de la abstención. No obstante hacia mediados de 1997 cambió su estrategia política, se asoció con diversas individualidades y organizaciones civiles y optó por la vía electoral. Se estructuró y legalizó el partido Movimiento Quinta República (MVR) y se inició su consistente ascenso en las encuestas de opinión pública. El Polo Patriótico agrupó al naciente partido MVR y a organizaciones tradicionales como el MAS (Movimiento al Socialismo), PCV (Partido Comunista de Venezuela), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otros grupos como el PPT (Patria para Todos) y cuatro pequeñas agrupaciones.³

El partido COPEI (Comité de Organización Político Electoral Independiente) eligió como candidata presidencial a una independiente, Irene Sáez, ex Miss Universo y exitosa alcaldesa de Chacao, quien ostentaba altos niveles de popularidad en las encuestas preelectorales. AD (Acción Democrática) seleccionó a su máximo dirigente partidista y secretario general Alfaro Uceró, cuyas primeras incursiones en la

3 Información y análisis de la conformación política, organizativa e ideológica de este movimiento en: Blanco Muñoz (1998); Garrido (1999; 2000) entre otros.

vida política nacional databan de los años 40. El recién formado partido Proyecto Venezuela, expresión nacional del partido regional Proyecto Carabobo, designó a Henrique Salas Romer como su candidato presidencial, exitoso ex gobernador del estado Carabobo. La Causa R inicialmente apoyó a Irene Sáez, y luego resolvió lanzar su propia candidatura con Alfredo Ramos. Se postularon 16 candidatos presidenciales, pero entre renuncias y otras eventualidades la lista se redujo a 11. A diferencia de los comicios previos, el cuadro de candidaturas reflejaba la prominencia de individualidades provenientes de organizaciones no tradicionales o independientes de los partidos políticos.

El área propiamente electoral también experimentó cambios significativos. En diciembre de 1997 se promulgó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), en la cual se introdujeron importantes innovaciones. Entre las más destacadas se cuenta la automatización del proceso electoral, en las fases de votación, escrutinio, totalización y adjudicación. La despartidización de los organismos electorales, a partir de la incorporación de ciudadanos independientes como autoridades del organismo central, el CNE (Consejo Nacional Electoral), y la selección por sorteo de los miembros de las juntas electorales estatales y municipales y las mesas de votación. La consagración del derecho al sufragio de los venezolanos residentes en el exterior y la inclusión del referendo consultivo para materias de alcance nacional.

Debido a la coincidencia de las elecciones nacionales y regionales en diciembre de 1998, el Congreso resolvió en mayo de 1998 separar los comicios. Se decidió que las elecciones del Congreso, gobernadores y asambleas legislativas de los estados tuvieran lugar en noviembre de 1998 y las presidenciales en diciembre de 1998, dejando para el segundo semestre de 1999 la elección de los concejos municipales y juntas parroquiales.

Diversos sectores políticos e institucionales, incluyendo la directiva del CNE, abogaron a favor de la separación de las elecciones. El principal argumento era la necesidad de preservar la autonomía y visibilidad de la elección regional, en sintonía con el proceso de descentralización. Se argumentaba que el influjo de las elecciones nacionales sobre las demás, particularmente de la presidencial, le restaría independencia y relevancia a los comicios regionales. Se destacó que la profusión de opciones y candidaturas confundiría al elector, impidién-

dole una escogencia bien informada y reflexiva. También se planteó que la organización del proceso comicial y el acto de votación en elecciones conjuntas se dificultarían tanto que podrían afectar su viabilidad. Aceptada la necesidad de la separación de los comicios, el orden en que éstas debían ocurrir generó ásperas polémicas.

El esquema propuesto en el Congreso obedeció al interés de los partidos dominantes de asegurar posiciones de poder en el ámbito parlamentario y regional frente a la creciente consolidación y ascenso de la candidatura de Chávez, que percibían como peligrosa para la estabilidad y permanencia del orden democrático, y para su propia supervivencia. Se pensaba que si la elección presidencial tenía lugar primero, una intención de voto favorable a Chávez, como consecuencia del llamado “efecto portaviones”, determinaría la escogencia de los representantes al parlamento y a los gobiernos regionales, generando en toda la estructura político-administrativa una correlación de fuerzas favorable a la misma. Por el contrario, se argumentaba que si los comicios parlamentarios y regionales ocurrían en primer lugar, el votante estaría en mejores condiciones para diferenciarlos de la elección presidencial y para apoyar a los liderazgos locales y parlamentarios de manera más autónoma. Diversos sectores políticos y de la opinión pública cuestionaron este esquema por considerarlo ventajista, sin embargo así fue aprobado y llevado a cabo. Así, por primera vez en la historia comicial del país desde 1958, tuvo lugar una elección presidencial aislada del resto y hubo dos elecciones en un mismo año.

Las vicisitudes de la dinámica político-electoral y de la campaña condujeron a otras situaciones inéditas y dramáticas. Faltando muy pocos días para la realización de la elección presidencial, los partidos AD y COPEI le retiraron el soporte a sus respectivos candidatos y apoyaron a Salas Romer, contra quien se habían opuesto acerbamente hasta pocas semanas antes. Todo ello generó gran confusión e irritación en el electorado, el cual se volcó a favor de la candidatura de Chávez. Así, nuevamente por primera vez desde 1958, los grandes partidos tradicionales se presentaron a la contienda sin candidato propio y le endosaron sus votos a un candidato ajeno.

Los acomodos del cronograma electoral, las decisiones iniciales acerca de las candidaturas y los cambios de última hora, fueron una expresión vívida del estado de confusión y de decaimiento en que se encontraban las organizaciones partidistas tradicionales y, por otro

lado, del significativo reto que les plantearon las opciones emergentes. En los sondeos de opinión se fue consolidando un apoyo consistente a las organizaciones y candidatos que representaban una ruptura con el pasado. No obstante, hay que destacar que las innovaciones introducidas en la ley del sufragio vigente y que se pusieron en marcha en los comicios de 1998 expresaban tendencias también presentes entre porciones de ese liderazgo, y que apuntaban hacia el refrescamiento de las reglas electorales y la actualización institucional del país.

2.1 Las elecciones parlamentarias y regionales de noviembre de 1998

Al examinar los resultados de las elecciones legislativas de noviembre de 1998 destacan varios aspectos. Por un lado, el rápido crecimiento y “posicionamiento” de los partidos Proyecto Venezuela (PV) y sobre todo MVR, que por primera vez participaban en la competencia electoral nacional. Otro rasgo fue la nueva reducción del volumen sumado de votos y de escaños de los partidos AD y COPEI, fenómeno que había ocurrido con fuerza en las elecciones de 1993. Esta vez ambas agrupaciones concentraron el 36,1% de los votos lista a la cámara de diputados, aunque por efecto del sistema electoral alcanzan el 43,5% de los puestos. Se evidenció en esos comicios la fragilidad de la implantación de los partidos LCR y Convergencia que habían obtenido altas votaciones en 1993 y que disminuyeron severamente su caudal electoral 5 años después, aunque parte de la votación de LCR se dirigió hacia los candidatos del PPT, partido que resultó de una escisión de LCR. Por último, el MAS logró una votación algo inferior a la obtenida en 1993, con lo que su vinculación con el Polo Patriótico no incrementó su caudal electoral.

La votación para elegir a los representantes de la cámara de diputados de los partidos muestra cambios importantes en las preferencias de los electores. La votación sumada de AD y COPEI alcanzó el 36% del total, mientras que los votos combinados de MVR (19,9%) y PV (10,4%), los nuevos partidos con votación significativa de esta contienda, superaron ligeramente el 30% del total. Si bien estos porcentajes no se tradujeron exactamente en la distribución de escaños dentro del Congreso, sí se observa cómo las fuerzas emergentes siguen desplazando a las tradicionales, produciéndose así un resultado semejante al de 1993, aunque con diferentes partidos nuevos. Ello nos lleva a

llamar la atención sobre un rasgo muy destacado por Molina Vega (2001), como es el de la volatilidad del electorado y la desalineación partidista, que provocaron el surgimiento de un sistema multipartidista inestable de difícil consolidación, a diferencia del bipartidismo estable que caracterizó la dinámica partidista desde 1973 hasta 1988. Y desde luego, insistir en la ratificación de la tendencia al desalojo y sustitución de los partidos tradicionales por fuerzas emergentes.

En la elección de gobernadores también ocurrió una nueva alineación de fuerzas. De un total de 23 gobernaciones (se agregó el recién creado estado Vargas), los candidatos del partido AD triunfaron en 8 estados y los de COPEI en 4 y en alianza, en 1 estado. Los partidos asociados al Polo Patriótico triunfaron 7 gobernaciones, correspondiéndole 1 al MVR, 3 al MAS, 3 al PPT. Por su parte PV repitió su victoria en Carabobo, Convergencia se mantuvo en Yaracuy y en el Zulia ganó nuevamente Arias Cárdenas, apoyado por una amplia alianza que incluyó al MVR, COPEI, LCR y al partido Integración, Renovación y Nueva Esperanza (IRENE).

De ambos grupos de resultados electorales emergió un nuevo panorama político-electoral, en el que compartían posiciones de poder de manera relativamente equilibrada los partidos tradicionales y los grupos emergentes, destacando el rápido crecimiento de los últimos, así como el sensible debilitamiento de las opciones que en 1993 tuvieron ese carácter, los partidos Convergencia y LCR. Los resultados de las elecciones de noviembre de 1998 también muestran que en las regiones más pobladas ganaron posiciones las nuevas fuerzas en detrimento de las tradicionales. Si bien estos resultados no fueron concluyentes en términos de la implantación definitiva del Polo Patriótico o del desplazamiento definitivo de los partidos tradicionales, anunciaron un cambio en la correlación de fuerzas y alertaron a los sectores tradicionales acerca de la implantación de Chávez y de su coalición.

2.2 Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998

Los evidentes avances del Polo Patriótico, la limitada votación del partido PV, el sólido apoyo a la candidatura de Chávez reflejada en los diversos sondeos de opinión, el decaimiento de la candidatura de Irene Sáez, la falta de arraigo de Alfaro Ucero, la marcada polarización del ambiente político-electoral generaron una dinámica muy par-

ricular entre las elecciones de noviembre y las de diciembre de 1998. Los partidos AD y COPEI resolvieron retirar su respaldo a sus respectivos candidatos y apoyar la candidatura de Salas Romer. El cálculo fue que la votación sumada de los partidos y candidatos asociados con esas agrupaciones superaría a la de Chávez. Si bien en términos aritméticos había elementos de juicio para llegar a esa conclusión, la realidad produjo un resultado muy diferente.

No obstante, la decisión de última hora de apoyar a Salas Romer, crítico severo del bipartidismo de AD y COPEI, contra quien estos partidos se habían enfrentado hasta con mayor fuerza que contra el propio Chávez, generó un sentimiento de desconcierto y rechazo en la población, que se volcó a votar a favor de Chávez. Igualmente, el incremento de la votación entre uno y otro proceso, al bajar la abstención del 46% al 37%, fue absorbido mayoritariamente por Chávez.

Finalmente resultó una contienda altamente polarizada en la que los 2 candidatos más votados, ambos representantes de sectores emergentes, obtuvieron el 96,17% de los votos. Al igual que en las elecciones de 1993, las preferencias de los electores se orientaron tempranamente a favorecer a las opciones más cuestionadas del *status quo*, prevaleciendo el candidato con el discurso y prácticas más radicales, Chávez Frías. Aquel 52,41% del electorado que en 1993 votó a favor de los candidatos anti-sistema, en 1998 se volcó hacia Chávez, quien obtuvo el 56,2% de los votos, proveniente de 3.673.685 electores, equivalente al 33,43% de los electores inscritos.⁴

Frente a estos resultados electorales caben varias consideraciones. Una de ellas es preguntarse si la estrategia diseñada por los partidos tradicionales de separar las elecciones colocando en primer lugar los

4 Luego de estas elecciones y las del año 2000 se transmitió, nacional e internacionalmente, la impresión de que se trataba de la votación más alta obtenida por candidato presidencial alguno en el país. En honor a la verdad y sin pretender subestimar la importancia del caudal electoral obtenido por Chávez en los comicios de 1998 y 2000, cabe destacar que la votación obtenida por Jaime Lusinchi en 1983 llegó a 3.773.731 equivalentes al 56,72% de los sufragios con una abstención del 12,25%. Por su parte, la votación obtenida por Carlos Andrés Pérez en 1988 alcanzó 3.868.843 votos equivalentes al 52,89% con una abstención del 18,08%. En términos relativos y por efecto de la alta abstención, los votos absolutos obtenidos por Chávez eran equivalentes al 33,43% del total de los electores inscritos, a diferencia del 49,77% y del 43,32% obtenidos por Lusinchi y Pérez respectivamente.

comicios parlamentarios y regionales produjo los efectos esperados. El objetivo de preservar la autonomía de las elecciones regionales y parlamentarias y promover de ese modo la votación a favor de los liderazgos, tradicionales o no, en dichos ámbitos, se logró. Probablemente, la polarización de las preferencias en torno a la elección presidencial sí hubiese desdibujado la naturaleza de los comicios regionales y reducido las oportunidades de los líderes regionales asociados con organizaciones tradicionales, de modo que aunque el clima político general influyó sobre los resultados electorales, no los desnaturalizó por completo. No obstante, la estrategia adoptada no fue eficaz para detener el avance de la candidatura de Chávez, menos aún luego del confuso episodio del retiro del apoyo partidista a las candidaturas de Alfaro Ucero y de Irene Sáez.

La realidad sociológica del cambio de las preferencias electorales, la nueva volatilidad del electorado y el desplazamiento del apoyo al binomio AD-COPEI, el surgimiento de nuevos actores y del atractivo generado por opciones enfrentadas al *status quo* eran rasgos que estaban firmemente arraigados en el nuevo comportamiento electoral del venezolano, y venían expresándose consistentemente a lo largo de los años 90. En ese contexto, las maniobras político-electorales de última hora tuvieron un alcance limitado, e incluso un efecto contraproducente.

3. La “refundación de la República” y el proceso constituyente⁵

El claro triunfo electoral de Chávez y de sus aliados trajo cambios rápidos en la dinámica sociopolítica. Las fuerzas emergentes accedieron al gobierno con un proyecto de poder madurado durante varios lustros, desde sus tiempos conspirativos dentro de las Fuerzas Armadas. La realización de una Asamblea Constituyente para “refundar la República” fue la principal promesa electoral de Chávez y de su coalición, y apenas llegados al poder se activaron los mecanismos para su convocatoria. Ya para el 19 de enero de 1999, en respuesta a dos re-

5 La “refundación de la República” fue un tema de la campaña electoral, con el que se sintetizó la idea de transformar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. En la Constitución vigente se consagró esta idea en el Preámbulo afirmando: “El pueblo de Venezuela, ... con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, ... decreta la siguiente Constitución” (énfasis mío).

cursos de interpretación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había pronunciado favorablemente en torno a la posibilidad de utilizar el referendo consultivo previsto en la ley del sufragio vigente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aun cuando dicha figura no existía en la Constitución de 1961. El mismo día de la toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el recién proclamado presidente emitió un decreto solicitando la consulta popular acerca de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, horas después de haber aceptado las obligaciones inherentes a su cargo jurando sobre la “moribunda” Constitución de 1961. Con estos eventos se inició el proceso constituyente venezolano, que marcó la dinámica sociopolítica del año 1999, y más allá.

3.1 Los comicios del proceso constituyente

El proceso constituyente se realizó en tres fases comiciales. El referendo del 25 de abril de 1999 para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC; la elección de los representantes a la ANC el 25 de julio de 1999 y el referendo del 15 de diciembre de 1999 para aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la ANC. Cada proceso comicial tuvo sus particularidades y aportó su especificidad a la dinámica sociopolítica del país, pero como balance general se puede afirmar que en cada uno de ellos se fue afianzando el apoyo a Chávez y a su proyecto, al tiempo que la dinámica de las fuerzas que se le oponían también fue adquiriendo nuevos matices.

Luego de superar diversos obstáculos jurídicos, el 25 de abril de 1999 tuvo lugar el referendo para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC. Los votantes debieron responder 2 preguntas: La primera

¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?

Y la segunda referida a la aprobación de las bases comiciales para la elección de los miembros de la ANC. Este fue el primer referendo consultivo de carácter nacional convocado y realizado en el país. Los resultados del referendo mostraron aspectos relevantes de la nueva dinámica sociopolítica. La abstención llegó al 62,3%, el mayor nivel

de la historia comicial del país hasta ese momento, no obstante la baja participación no deslegitimó ni obstruyó la marcha del proceso constituyente. Los resultados por el “Sí” ratificaron la votación obtenida por Chávez en diciembre de 1998, llegando a 3.630.666 en la primera pregunta y 3.275.716 en la segunda, mientras que el “No” obtuvo 300.233 votos en la primera pregunta y 512.967 votos en la segunda. Los sectores que se oponían a Chávez se encontraban en su menor nivel de articulación y muy desmoralizados frente a los resultados de diciembre, en su mayoría optaron por abstenerse y no se estructuraron en una campaña a favor del rechazo a la convocatoria de una ANC.

Ni en este proceso ni en los siguientes que tuvieron lugar en 1999 y 2000 los sectores opositores a Chávez y su proyecto lograron igualar o superar el caudal de votos obtenidos por la candidatura de Salas Romer o mantener todas las votaciones importantes en el ámbito regional logradas en noviembre de 1998, aunque en los siguientes episodios comiciales fue mejorando su desempeño. Ello evidenció que el triunfo electoral de Chávez y del Polo Patriótico no era un fenómeno efímero o un producto circunstancial de equivocados cálculos coyunturales, sino que se enlazaba sustancialmente con las diversas expresiones de búsqueda de cambio que venían ocurriendo desde finales de los años 80 y que tuvieron consistentes expresiones electorales.

El 25 de julio de 1999 tuvo lugar la elección de los representantes a la ANC. Este proceso se salió de los patrones convencionales por diversas razones. El aspecto más importante fue el relacionado con el sistema electoral adoptado para seleccionar a los representantes, aprobado en el referendo de abril de 1999. Se trataba de un sistema mayoritario, basado en una circunscripción nacional de 24 candidatos y 24 circunscripciones regionales con un número variable de candidatos dependiendo de la población de cada entidad, junto con la designación de 3 representantes indígenas de acuerdo con sus “usos y costumbres ancestrales”. Este esquema se alejaba drásticamente de las fórmulas empleadas para elegir los representantes a los cuerpos colegiados desde 1958, basadas en el principio de la representación proporcional y que estaban consagradas en la Constitución y la ley del sufragio vigentes. El resultado fue una exagerada sobrerrepresentación de la mayoría, lo que significó que los candidatos del Polo Patriótico obtuvieron el 95% de los miembros a la ANC a partir de una votación que rondaba el 65% del total. Así, de los 131 miembros de la ANC,

122 provenían de la lista del Polo Patriótico y 3 eran diputados indígenas (que también estaban identificados con el Polo Patriótico). En este proceso la abstención alcanzó el 54%.

Para llegar a este resultado influyeron importantes circunstancias. Por un lado, no se examinaron a fondo las implicaciones y consecuencias del sistema electoral adoptado, de modo que importantes sectores de la opinión pública, incluidos los de oposición, lo apoyaron entusiastamente. Desde mediados de los años 80, la llamada uninominalidad y la personalización del voto, en contraposición a la representación proporcional con listas bloqueadas y cerradas, habían sido propuestas enarboladas por diferentes sectores sociales y políticos como banderas de lucha en contra del bipartidismo y sus desviaciones. No obstante, debido a la falta de experiencia y escasa comprensión del sistema electoral adoptado, diversos grupos e individualidades asociados a la oposición apoyaron las nuevas reglas, pero actuaron como si la regla vigente aun era la de la representación proporcional. Se presentaron de manera dispersa cerca de 1.000 candidatos de oposición, la mayoría de los cuales se postularon por “iniciativa propia” aun cuando tenían activos vínculos partidistas y la mayor parte de estos candidatos compitieron entre sí para captar el voto del mismo electorado.

Por el contrario, el oficialismo actuó con extrema eficacia maximizando sus posibilidades electorales al presentar una lista única de 124 candidatos distribuidos a lo largo del territorio en zonas electorales, los llamados “Kinos Chávez”. Esta estrategia le permitió obtener el máximo provecho del sistema electoral y colocar una mayoría absoluta de sus representantes en la ANC. Con esta adecuada estrategia, el oficialismo aprovechó eficazmente la alta aceptación que aun tenía entre la población y potenció sus oportunidades electorales. No obstante, también hay que destacar que las autoridades públicas identificadas con el oficialismo actuaron de manera abiertamente parcializada, participaron en actos proselitistas y utilizaron recursos e instalaciones públicas para promover sus candidatos a la ANC, en contravención evidente de las normas electorales y las referidas al manejo de la administración pública.⁶

6 La situación llegó a tales extremos que el CNE resolvió sancionar al presidente de la República con la multa correspondiente, por contravenir la ley del sufragio

Lograr el control político de la ANC a través de la presencia de una representación abrumadoramente mayoritaria lució como un triunfo de la coalición gobernante, y le garantizó gran holgura para consagrar un texto constitucional acorde con su proyecto político. No obstante ese control hegemónico generó consecuencias negativas sobre las relaciones internas del bloque oficialista y sobre la posterior aceptación del texto resultante. La propia dinámica de las deliberaciones hizo que afloraran o que se evidenciaron desavenencias importantes al interior del Polo Patriótico, más que diferencias entre oficialismo y la mínima bancada opositora (Viciano Pastor/Martínez Dalmau 2001). Por otro lado, el déficit de representación de amplios sectores redundó en que el texto resultante fuera percibido como la expresión del proyecto político del presidente Chávez y de su coalición, y no como el reflejo de las aspiraciones del conjunto de la sociedad. A diferencia de la Constitución de 1961, la de mayor duración en nuestra historia republicana, que fue el resultado de un amplio consenso entre sectores divergentes y que comenzó a ser cuestionada luego cerca de tres décadas de vigencia, la duración y aceptación de la de 1999 pareciera estar asociada a las vicisitudes y estabilidad del gobierno de Chávez.

Una vez instalada la ANC a inicios de agosto de 1999, al discutir su reglamento interno se autodefinió como “originaria”. Desde la campaña electoral, el proceso constituyente estuvo signado por la discusión acerca de los límites y alcances de la ANC, de su carácter originario o derivado, y por la definición de las competencias de los poderes constituidos frente al poder constituyente. Aun cuando en sucesivas decisiones la CSJ estableció los límites de la ANC, después de instalarse se declaró originaria y, por tanto, libre de las ataduras que le imponía la Constitución de 1961 y el entramado institucional existente.⁷

que prohíbe la participación de funcionarios públicos en la realización de campañas proselitistas en el ejercicio de sus cargos.

- 7 El artículo 1 del Estatuto de Funcionamiento de la ANC establecía: “La ANC es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público. [...] Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la ANC [...] La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo aquello

La ANC asumió radicalmente su carácter originario. En su primer mes de actividad, la ANC centró su atención en la discusión del reglamento interno, en la organización de sus actividades, y en la evaluación de la posibilidad de intervenir o disolver los poderes judicial y legislativo. Desde temprano también se evidenció que el proceso constituyente y la ANC fueron concebidos como fórmulas para producir rápida y eficazmente cambios en la correlación de fuerzas existente derivada de las elecciones de noviembre de 1998, a fin de trascender esos resultados y profundizar los de diciembre de 1998. Igualmente, a través de la ANC se promovieron nuevas figuras, hasta ese momento desconocidas para el amplio público, y que comenzaron a formar parte de la nueva clase política.⁸ De este modo la ANC también le otorgó visibilidad y protagonismo a un nuevo liderazgo, opacando a la dirigencia tradicional.

La ANC fue utilizada como una poderosa herramienta política. Tuvo varias funciones, hábilmente concebidas y empleadas por la nueva coalición gobernante en función de sus objetivos de poder: fue un instrumento para reordenar jurídica e institucionalmente el Estado aun antes de promulgada la Constitución; sirvió para trastocar la correlación de fuerzas existente y fortalecer a los sectores emergentes; se usó para promover nuevos líderes políticos y desplazar a los existentes, y –casi secundariamente– redactar una nueva Constitución, con el propósito de generar un nuevo conjunto de reglas, valores, actores e instituciones para trastocar las bases tradicionales de ordenación de la sociedad venezolana. La función de elaboración constitucional propiamente dicha fue abordada de forma apresurada, sacrificando la discusión sistemática y la consistencia del texto, al punto que se publicaron varias versiones de la Constitución en diferentes fechas, cada una con cambios de forma y de fondo (Combellas 2001).

En el ejercicio de la función política, una de las decisiones más discutibles y que generó una fuerte reacción nacional e internacional fue el intento de disolver el poder legislativo. Luego de una transacción entre sectores oficialistas y de oposición se mantuvo el funcionamiento de la Comisión Delegada y otras comisiones del Congreso,

que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la ANC”.

8 Un examen de algunos rasgos de esta nueva clase política en Martínez Barahona (2002).

lo que redujo esa instancia a una mínima expresión. Esta decisión de la ANC fue respaldada por una polémica sentencia de la Sala Plena de la CSJ, a través de la cual se consagró la llamada *supraconstitucionalidad* de las decisiones y actuaciones de la ANC, como respuesta al intento de impugnar la decisión de la ANC (TSJ 2000). Esta polémica decisión de la CSJ sirvió para legitimar desde el poder judicial las actuaciones ya emprendidas por el cuerpo constituyente, en ámbitos distintos a los de la estricta elaboración constitucional, como fueron la intervención en los poderes públicos y la destitución y designación de los titulares de los mismos.

El tercer episodio comicial del proceso constituyente tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, coincidiendo con el trágico deslave del estado de Vargas y las torrenciales lluvias de otros estados del país. Los resultados nuevamente favorecieron ampliamente al oficialismo, pero esta vez la oposición se estructuró con cierta eficacia alrededor del “No”, mejorando su desempeño respecto del referendo de abril. La pregunta sometida a la consideración del electorado fue: “¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente?” la respuesta favorable obtuvo 3.301.475 votos, equivalente al 71,78% del total de votos válidos y el “No” obtuvo 1.298.105 votos, equivalentes al 28,22% de los votos válidos. La abstención se ubicó en un 56%.

El remate de la operación de ocupación de los poderes públicos a través del proceso constituyente se produjo en las semanas finales de diciembre de 1999, durante el aparente limbo jurídico producido después de la aprobación popular de la nueva Constitución, pero antes de su entrada en vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial. En esos días, la ANC destituyó a todos los titulares de los poderes públicos (a excepción del presidente de la República), incluyendo al Fiscal, Contralor, Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral y los sustituyó por nuevas autoridades identificadas con el oficialismo y designó a la titular de la recién creada Defensoría del Pueblo.

La sentencia sobre la *supraconstitucionalidad* liberaba a la ANC de las ataduras impuestas por el orden político-institucional existente, a su vez el proyecto de Constitución aprobado el 15 de diciembre de 1999 establecía que la nueva Constitución entraba en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial. Así, en medio del estupor nacional que produjo la devastación ocasionada por el deslave natural en

el estado Vargas, se retrasó intencionalmente la publicación en Gaceta Oficial de la nueva Constitución hasta el día 29 de diciembre de 1999, y en esos días se decidió la destitución y designación de los ocupantes de los poderes públicos, al margen de las disposiciones contenidas tanto en la Constitución de 1961, como en la recién refrendada. Así, amparados en la llamada *supraconstitucionalidad* de sus actuaciones, desde la ANC se completó la redefinición de la correlación de fuerzas en los poderes públicos, acomodándola a favor del oficialismo.

Al efectuar el balance de estos tres procesos comiciales y teniendo como referencia los del año 1998, destacan nuevas características de la dinámica sociopolítica venezolana. Las fuerzas emergentes se impusieron con fuerza y rapidez en el escenario político y aprovecharon el inicial apoyo popular para profundizar y potenciar su capacidad de ocupar posiciones de poder, más allá de lo que derivaba naturalmente del cuadro electoral resultante de las elecciones de noviembre y diciembre. En apenas un año habían aprobado una nueva Constitución y en el transcurso del proceso constituyente desplazaron a los sectores políticos tradicionales y se conformaron como una nueva clase política. Lo que el Polo Patriótico no logró a través de los comicios de 1998, lo obtuvo a través del proceso constituyente, como la casi inhabilitación del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La otra cara de esta realidad era el estado de desarticulación, zozobra y desconcierto en que estaban sumidos los actores tradicionales, que quedaron duramente golpeados frente a los resultados electorales de 1998 y avasallados por el empuje de las nuevas fuerzas en el poder.

La audacia, novedad y discutible legalidad de muchas de estas acciones desconcertaron a los actores tradicionales, lo que sumado al atractivo que aun ejercía el nuevo presidente y sus aliados desencadenó una dinámica sociopolítica marcada por la confrontación y el acorralamiento de los sectores enfrentados a los nuevos ocupantes del poder. La alineación de los poderes públicos en función de los intereses del proyecto político de la “quinta república” y de sus promotores, produjo decisiones favorables a la implantación del nuevo proyecto. La dinámica del consenso característica de la llamada “democracia puntofijista” fue sustituida por la exacerbación de las diferencias, la exclusión política y el deslinde radical entre las fuerzas asociadas a los sectores emergentes vinculados con el nuevo proyecto político y el

liderazgo tradicional, no sólo en el ámbito político, sino en las esferas económica, eclesiástica, militar, sindical, educativa, mediática, etc.

La vía electoral resultó altamente eficaz para legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e institucionales habituales y para forzar las barreras legales. En este año se implantaron los cimientos de un proyecto sociopolítico con aspiraciones de largo plazo, que se basó en la expectativa de cambio presente en la población durante al menos una década y que permitió la aceptación desprevenida de muchos excesos y distorsiones, no necesariamente incluidas en la agenda de las aspiraciones populares. No obstante, la reacción en contra de las rupturas, desviaciones y vicios no deseados tardó en consolidarse y en expresarse como sentimiento mayoritario; más bien predominaba en amplios sectores la impresión de la existencia de una adecuada relación entre sus preferencias y votos y el esquema de poder resultante de los procesos comiciales de 1998 y 1999.

4. El año 2000: la relegitimación de los poderes públicos

La idea de convocar nuevas elecciones estaba presente en el ambiente oficialista aun antes de aprobarse la nueva Constitución. Esta decisión planteó un conjunto de interrogantes: ¿por qué si acababan de tener lugar elecciones en 1998 se requería elegir nuevamente a las mismas autoridades?, ¿por qué las decisiones asociadas con la puesta en marcha del nuevo proceso comicial se tomaron de manera tan apresurada, y contraviniendo disposiciones legales y acuerdos societales existentes?, ¿por qué las fuerzas de la coalición gobernante adoptaron una estrategia relativamente riesgosa, de someterse nuevamente a la prueba del favor popular, cuando ya tenían aseguradas importantes posiciones de poder, como la presidencia de la República?.

Desde el punto de vista legal y constitucional se justificó esta decisión argumentando que se debían adecuar los períodos y funciones de las autoridades electas a las nuevas disposiciones del texto. Por ejemplo que se debía cambiar la estructura parlamentaria, que pasó de ser bicameral a ser unicameral, y garantizar la inclusión de la representación indígena. Una consideración que ejerció un gran peso en la decisión de convocar nuevas elecciones fue la posibilidad de alargar el período presidencial, con lo cual el presidente Chávez tendría la oportu-

tunidad de iniciar un nuevo período de 6 años, que no se sumaría al tiempo de mandato que ya llevaba.

Otras consideraciones de mucho peso estaban asociadas con las realidades políticas del momento y las posibilidades de implantación del nuevo proyecto sociopolítico. Como sabemos, las elecciones de diciembre de 1998 habían producido un poder ejecutivo dominado por Chávez y su coalición, mientras que como resultado de las elecciones de noviembre de 1998 en el parlamento y en el ámbito regional el Polo Patriótico no había resultado el boque mayoritario y las fuerzas tradicionales aun conservaban importantes cuotas de poder. Por otro lado, la estructura de poder a nivel municipal, alcaldías y concejos municipales, estaba más desfasada aun, puesto que derivaba de las elecciones de 1995. Así, la nueva convocatoria a elecciones generales o la llamada “relegitimación de poderes” se justificó y por la necesidad de alinear y sintonizar la correlación de fuerzas en los poderes públicos y en la estructura político-administrativa central, regional y local, asegurando el predominio del Polo Patriótico a lo largo y ancho de dicha estructura y para consolidar el desplazamiento de las fuerzas contrarias.

Otro aspecto relevante se refería al apoyo electoral con que contaba el oficialismo. A pesar de las apariencias, el caudal electoral del gobierno era limitado. En todos los procesos efectuados en 1998 y 1999 la votación a favor del presidente y de las fuerzas vinculadas al Polo Patriótico se ubicaba en alrededor de un tercio del electorado. Así, la votación obtenida por Chávez, los 3.673.685 votos equivalían al 33,43% del electorado total, y en diciembre de 1999 los votos a favor del “sí” (asimilable al voto oficialista) representaba el 30,18% del total de electores inscritos. Si bien se trataba de una votación superior a la del resto de los factores, lucía escasa frente al ambicioso propósito de “refundar la república” y de trastocar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. Ello llevaba a la necesidad de maximizar las potencialidades de esos votos, transformando el 33% del apoyo electoral en un volumen próximo al 100% de los cargos en los poderes públicos. Desde la óptica de los nuevos ocupantes del poder se requería actuar con rapidez para aprovechar el soporte popular que, aunque se mantenía firme, era relativamente modesto respecto a la magnitud del proyecto planteado, a sabiendas que las vicisitudes del ejercicio gubernamental podía erosionar ese soporte, y fomentar el

fortalecimiento de la oposición. Por su parte, la seguridad de contar con ese apoyo popular en esas circunstancias apuntaló la decisión de convocar las elecciones, más allá de los riesgos propios de cualquier proceso comicial.

Para promover una transformación radical de la sociedad era necesario controlar las palancas fundamentales de toma de decisiones en la estructura horizontal del poder, copando los poderes públicos, y en la estructura vertical de poder, mediante la alineación adecuada de las autoridades electas. La primera fase la cumplió la ANC con el nombramiento en diciembre de 1999 de todos los cargos no electivos (Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral). Con las nuevas elecciones se entraba en la fase de copar los cargos electivos, completando o superando los resultados de 1998. Para ese propósito se promovió la llamada relegitimación de los poderes.

La organización del proceso electoral bajo estas premisas se inició tempranamente a finales de diciembre de 1999 con el nombramiento por parte de la ANC de las autoridades del CNE, todas afectas al oficialismo.⁹ Fue seguido por la promulgación el 3 de febrero de 2000 del Estatuto Electoral de los Poderes Públicos y la fijación de la fecha de las nuevas elecciones por parte de la ANC. Con estas decisiones se concretó la convocatoria de las llamadas “megaelecciones” –elección de todos los cargos de representación popular– para el 28 de mayo de 2000, fecha en la que escogerían simultáneamente 6.241 cargos ejecutivos y legislativos nacionales y locales. En el Estatuto Electoral se modificaron las reglas de votación vigentes y se adoptó un sistema electoral mixto para la composición de los cuerpos colegiados, en el que el 60% de los cargos provenían del voto mayoritario y el 40%, del voto proporcional; con ello se procuraba obtener el efecto de sobrerrepresentación de la mayoría, aunque en proporciones mucho menores a lo ocurrido en la ANC y a la propuesta inicial de aprobar un esquema del 80% mayoritario-20% proporcional.

La preocupación por maximizar el apoyo electoral del oficialismo también privó en el momento de proponer y aprobar la convocatoria

9 De los 10 directivos que conformaron el CNE, 6 pertenecían a la Dirección Nacional de Política Electoral (DINAPE) del MVR y 4 estaban directamente vinculados a alguno de los partidos de Polo Patriótico.

de una “megaelección”, soslayando importantes consensos societales existentes desde finales de los años 80 y que se ratificaron durante el debate electoral de 1998, acerca de la necesidad de diferenciar las elecciones regionales y locales de las nacionales, a fin de preservar la autonomía y visibilidad de las primeras.

Estas decisiones fueron impugnadas por diversas individualidades y agrupaciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSJ), alegando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las más importantes. Entre ellas destacaba la supuesta violación del artículo 298 de la nueva constitución que prohibía la modificación de la legislación electoral a menos de 6 meses de fecha de los comicios. Las argumentaciones fueron rebatidas por el TSJ apelando al controversial argumento de la “transitoriedad”, según el cual debía preverse un lapso –la transición– para ajustar el entramado institucional a las disposiciones de la nueva Constitución, por lo que la plena vigencia de las normas que regían la organización de los comicios y de los poderes públicos debía esperar la instalación de la Asamblea Nacional (TSJ 2000).¹⁰ La “transitoriedad”, como antes la “supraconstitucionalidad” de la ANC, sirvió de fórmula justificadora para justificar decisiones afines a los intereses políticos de los nuevos ocupantes del poder, en detrimento de la equidad e imparcialidad, en este caso del proceso comicial.

El oficialismo participó confiadamente en estas elecciones, aun cuando las mismas estuvieron marcadas por riesgos y problemas. Se produjeron importantes rupturas al interior del bloque en el poder, como la separación de Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos (3 de los 4 comandantes que junto con Chávez habían liderado el intento de golpe de febrero de 1992) y el lanzamiento de la candidatura presidencial de Arias Cárdenas, así como el alejamiento temporal del partido PPT de la coalición de gobierno. Fue una oportunidad para la articulación del esfuerzo opositor, el cual no fue plenamente aprovechado por sus principales actores, aún débiles después de sus recientes derrotas electorales. Y el evento más dramático fue la

10 En TSJ (2000) sobre la supuesta violación del artículo 298 de la Constitución, la sentencia de Cabrera Romero afirma “El Estatuto Electoral del Poder Público es una ley electoral distinta, que responde a la transitoriedad, que no está modificando una ley; sino que está naciendo para un fin único y extraordinario, y por ello, a una ley de esa naturaleza, no está dirigida la prohibición del artículo 298 ejusdem, y así se declara” (TSJ 2000: 75).

suspensión de las elecciones 3 días antes de la fecha prevista para su realización.

La organización de las “megaelecciones” estuvo marcada por la improvisación y el conflicto. La combinación entre la complejidad intrínseca de los comicios propuestos, la incapacidad gerencial de la directiva del CNE y la intervención política oficialista llevaron el proceso al colapso. Cuando era evidente que los comicios eran irrealizables, dos agrupaciones de la sociedad civil, “Cofavic” y “Queremos Elegir”, introdujeron un amparo oral ante el TSJ solicitando su suspensión. El 25 de mayo, a sólo 3 días de la fecha prevista, el TSJ ordenó detener íntegramente el acto electoral y convocar nuevos comicios en un plazo perentorio. Nunca antes en la historia electoral venezolana había ocurrido semejante desastre.

La Comisión Legislativa Nacional, el llamado “Congresillo”, cuerpo legislativo nombrado por la ANC que sustituyó al Congreso suspendido por decisión de la ANC y que continuó sus labores, seleccionó una nueva Junta Directiva del CNE. Esta vez se resolvió separar los comicios. Primero vino la elección presidencial, parlamentaria, de gobernadores, concejos legislativos estatales, alcaldes, alcalde mayor y concejo metropolitano el 30 de julio de 2000. Los demás cargos se eligieron el 3 de diciembre de 2000.

4.1 Las elecciones del 30 de julio de 2000

Los resultados de estas elecciones favorecieron ampliamente a los candidatos del gobierno, tanto en los que se refiere a los cargos unipersonales como a la representación en los cuerpos colegiados. A la elección presidencial sólo se presentaron tres candidatos: Chávez apoyado por nueve organizaciones, Arias por seis y Claudio Fermín por una. Se trató de la elección presidencial en la que participó el menor número de candidatos y agrupaciones desde 1958. Chávez obtuvo 3.757.773 votos, 2,2% más que en los comicios de 1998, equivalentes al 59,8% de los votos válidos y el 32,06% del total de electores. Arias obtuvo 2.359.459, equivalente al 37,5% de los votos válidos y Fermín 171.346 votos. La abstención se elevó al 43,7% y el número de electores inscritos fue 11.720.971. El presidente mantuvo aproximadamente igual su votación en términos absolutos y relativos, mientras que la

oposición no logró igualar las cifras alcanzadas en 1998, pero superó los bajos niveles de 1999.

Los cambios más importantes en la correlación de fuerzas resultantes ocurrieron a propósito de la elección parlamentaria y de los gobernadores de estado, principal objetivo procurado por el Polo Patriótico al promover estos comicios. Como resultado de las elecciones de 2000 el Polo Patriótico obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional (AN), y dentro de la coalición oficialista predominó el partido MVR, convirtiéndose en la fuerza individual mayoritaria al interior de la AN. Los partidos tradicionales, AD y COPEI sufrieron una nueva reducción significativa de su representación, al igual que partidos emergentes como PV. El MAS obtuvo una importante representación, producto de su hábil negociación dentro de la coalición de gobierno más que de su figuración electoral.

La sumatoria de los representantes de los partidos MVR, MAS y de los representantes indígenas llegó a 102 escaños dentro de la asamblea nacional, cifra superior a la mayoría simple, aunque inferior a los dos tercios requeridos (equivalente a 110 votos) para algunas decisiones trascendentes, como el nombramiento de los titulares de los poderes públicos. La coalición de gobierno utilizó sistemáticamente esa mayoría parlamentaria para promover su proyecto político. En las etapas iniciales el oficialismo logró con facilidad generar las alianzas y acuerdos necesarios para completar los votos requeridos para obtener decisiones por mayoría calificada, y tenía garantizadas las decisiones por mayoría simple. No obstante, los cambios en la dinámica política, como la separación de buena parte del MAS y de un grupo de parlamentarios del MVR de la coalición gobernante, redujo significativamente el tamaño de la bancada oficialista en el parlamento, al punto que para algunas decisiones incluso se le dificultaba reunir los 83 votos necesarios para asegurar la mayoría simple.¹¹

11 El cambio de la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional dificultó los acuerdos y el control oficialista de esa instancia. Un caso emblemático fue el de la imposibilidad de lograr los dos tercios necesarios para la designación de los miembros del CNE en 2003 en el parlamento, lo que ocasionó su designación temporal por parte del TSJ (Kornblith 2003a). Otro caso relevante fue el de las dificultades experimentadas por el oficialismo a finales de 2003 en su empeño por modificar la Ley Orgánica del TSJ y que acarreó modificaciones sucesivas del Reglamento Interno y de Debates de la AN a fin de lograr decisiones mediante mayoría simple.

En el ámbito regional las elecciones también favorecieron al oficialismo y produjeron un cambio en la correlación de fuerzas, con el claro predominio del MVR, que triunfó en once gobernaciones. En las gobernaciones de los estados Bolívar, Cojedes, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo los candidatos del MVR obtuvieron la victoria desalojando a gobernadores de AD o de COPEI, en algunos casos con márgenes electorales mínimos y en medio de controversias acerca de la pulcritud del proceso comicial. El único estado en el que prosperó una impugnación postelectoral fue en Amazonas, con lo que el partido PPT obtuvo la victoria frente al inicialmente proclamado gobernador de AD. El MVR también desplazó al MAS en los estados Lara y Portuguesa y al PPT en Vargas. El MAS obtuvo la victoria en los estados Anzoátegui, Aragua, Delta Amacuro y Sucre. Proyecto Venezuela volvió a triunfar en el estado Carabobo, COPEI en el estado Miranda y Convergencia en el estado Yaracuy. En el Zulia se impuso una nueva organización regional, Un Nuevo Tiempo (UNT).

En definitiva, el objetivo procurado por el oficialismo se logró plenamente con estas elecciones. Los partidos tradicionales quedaron debilitados al perder importantes posiciones dentro del parlamento y en un amplio número de gobernaciones, generándose una nueva correlación de fuerzas, claramente favorable al Polo Patriótico y al proyecto político del presidente Chávez.

4.2 Las elecciones de concejos municipales y juntas parroquiales y el referendo sindical del 3 de diciembre de 2000

Para completar el proceso electoral previsto para mayo de 2000 faltaba la elección de los concejos municipales y las juntas parroquiales, que tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2000. Es fácil entender que estos comicios fueran recibidos por la población con muy poco entusiasmo. Se trataba del séptimo proceso electoral en tres años, las autoridades a ser escogidas no son consideradas de gran importancia para la población, y las organizaciones y los candidatos carecían de recursos para promoverse, puesto que sus finanzas se habían agotado en el primer intento electoral de mayo, de modo que apenas hubo campaña electoral. El resultado fue una abstención del 76%, la mayor de toda nuestra historia electoral y el 35,5% de los concejales electos correspondieron al partido MVR.

En esa fecha también se convocó el llamado referendo sindical.¹² A los factores antes señalados que influyeron sobre la alta abstención se le sumó el rechazo a dicho referendo, cuyo propósito era forzar la renovación de la dirigencia sindical a lo largo y ancho del país, con la expectativa de generar una correlación de fuerzas favorable al oficialismo. Se introdujeron recursos ante el TSJ en contra de esta convocatoria alegando, entre otras cuestiones, que la materia sindical no era “de alcance nacional” y por lo tanto no correspondía a un referendo consultivo. Por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, no sólo se consideró que era pertinente el uso de esa figura, sino que se le otorgó carácter vinculante a los resultados del referendo.¹³ En esta ocasión el “Sí” obtuvo 1.632.750 votos, el 62,02% de los votos válidos y el “No”, 719.771 votos, el 27,34% de los votos válidos, los votos nulos sumaron el 10,64%. Aun cuando triunfó el “Sí”, la escasa participación del electorado fue interpretado como una merma de la capacidad de convocatoria del oficialismo y en particular del presidente, quien se vinculó directamente con la campaña de promoción del referendo y del voto afirmativo.

Durante la segunda mitad de 2001 tuvieron lugar las elecciones sindicales a lo largo de todo el país, desde la base hasta la cúpula del sector. Si bien el oficialismo logró el objetivo de desplazar a los líderes existentes a través del referendo, los resultados de las elecciones sindicales favorecieron ampliamente a la oposición, constituyéndose en el primer evento político electoral en el que las fuerzas contrarias al

12 La pregunta en este referendo fue: “¿Está usted de acuerdo con la renovación total de la dirigencia sindical, bajo estatuto especial elaborado por el poder electoral, conforme a los principios de alternabilidad y elección universal, directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se suspendan los directivos de centrales, federaciones y confederaciones sindicales establecidas en el país?”.

13 La ponencia aprobada elaborada por el magistrado Delgado Ocando afirmaba: “El referendo versa sobre una materia de especial trascendencia nacional, dado que la relación de trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado conforme lo dispone el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las normas imperativas que regulan dicha relación. [...] “La decisión soberana, en sentido afirmativo o negativo, sería un mandato constitucional del pueblo venezolano, titular de la soberanía, mandato que por su origen, integraría el sistema constitucional y no podría asimilarse, en caso afirmativo, a una intervención, suspensión o disolución administrativa, que es lo que prohíbe el artículo 95 de la CRBV” (TSJ-Sala Constitucional, 28.11.2000).

Polo Patriótico pudieron articularse exitosamente en torno a un evento comicial desde diciembre de 1998.

4.3 Balance de la relegitimación de los poderes

La relegitimación de los poderes satisfizo plenamente los objetivos del Polo Patriótico. A pesar de las tensiones y fracturas sufridas por el nuevo bloque en el poder a raíz de estos comicios, el balance neto le resultó claramente favorable. Lograron alinear armónicamente la correlación de fuerzas a lo largo de la estructura político-administrativa de poder a través de las elecciones. A su vez, una vez instalada la Asamblea Nacional a finales de año designaron a los titulares de los poderes Ciudadano y Judicial aprovechando su holgada mayoría y su capacidad de lograr acuerdos en dicha instancia. También en dichos poderes se aseguraron una mayoría favorable al proyecto político emergente. Al finalizar estas elecciones culminó la fase político-electoral de la “refundación de la República”. En esa etapa los ocupantes del poder contaron con una importante base de apoyo popular, que se mantuvo estable a lo largo de los comicios de 1998, 1999 y 2000. Aun cuando, como sabemos, se trataba de un tercio del electorado, fue crucial y suficiente para provocar cambios drásticos en la correlación de poder existente, dada la debilidad y desarticulación de las fuerzas opositoras.

Superada esta etapa, el gobierno entró en una fase de desarrollo de su acción de gobierno y la población comenzó a evaluar su desempeño en función de su capacidad de resolver los problemas socioeconómicos claves. En esa nueva etapa que se inició con la nueva presidencia de Chávez, el ánimo colectivo comenzó a cambiar progresivamente. Así, hacia el tercer trimestre de 2001 el agrado hacia Chávez se ubicaba en el 46% mientras que en el primer trimestre de ese año se ubicaba en el 68% (Keller 2003). La correlación de fuerzas resultante de las elecciones del 2000 dejó de representar adecuadamente las expectativas y preferencias colectivas, y la dinámica sociopolítica se tornó crecientemente adversa a la coalición gobernante, y en especial al presidente de la República.

5. Un nuevo ajuste entre aspiraciones y representación: la difícil ruta de la salida electoral

Desde la implantación de la descentralización y como producto de la profusión de comicios convocados entre los años 1998 y 2000, en el país se produjo un progresivo y adecuado ajuste entre las preferencias político-electorales de la población y el esquema de representación y la correlación de fuerzas resultante en las distintas instancias de poder, por el otro.

Luego de los avances y triunfos electorales del presidente Chávez y de sus aliados desde los comicios de noviembre de 1998 hasta los de diciembre de 2000, la dinámica sociopolítica fue cambiando. En las diversas encuestas y sondeos de opinión, fueron apareciendo signos de desafección de la población respecto del presidente y una evaluación crecientemente negativa de su gestión de gobierno. Desde el segundo semestre de 2001, coincidente con el fallido intento oficialista de asegurar una mayoría en el ámbito sindical, se fue estructurando un movimiento opositor a la presidencia de Chávez y a su proyecto sociopolítico. No obstante, después de los comicios de diciembre de 2000, estos cambios en el ánimo colectivo no han podido canalizarse ni expresarse a través de procesos electorales y por lo tanto no se han materializado en nuevas correlaciones de fuerzas más cónsonas con dichos cambios.

La estructura de poder emergente de los procesos del año 2000, a pesar de la ocurrencia de cambios importantes, como la reducción de la mayoría parlamentaria del oficialismo en el parlamento, luce desfada y detenida respecto a la magnitud del cambio operado en el ánimo colectivo. Buena parte de las luchas sociales y políticas acaecidas en el país desde el segundo semestre de 2001 han procurado cambiar esa realidad, en la búsqueda de un esquema de representación y poder en mayor sintonía con las nuevas aspiraciones colectivas. La mayor presión se ha ejercido en contra de la permanencia de Chávez en el poder, apelando a intensas movilizaciones masivas de protesta ciudadana y vías no electorales como paros cívicos y golpes de Estado, y a vías electorales como el frustrado referendo consultivo de febrero de 2003 y la activación del referendo revocatorio presidencial, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales, sólo puede hacerse

efectivo después de la mitad del período de gobierno, es decir a partir del 19 de agosto de 2003.

5.1 La tortuosa vía de los referendos

En noviembre de 2002 los diversos sectores de oposición agrupados en la llamada Coordinadora Democrática reunieron cerca de 2 millones de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial. El CNE fijó como fecha para la realización de ese referendo el 2 de febrero de 2003. El 22 de enero de 2003 la Sala Electoral del TSJ bloqueó esta iniciativa basándose en las irregularidades en la conformación de la Junta Directiva del CNE, mientras que la Sala Constitucional del mismo tribunal consideró legal y constitucional apelar a esa figura para consultar la opinión del “soberano”.¹⁴

En la fecha prevista para el referendo se organizó el llamado “Firmazo”, actividad a través de la cual nuevamente las diversas agrupaciones de la oposición reunidas en la Coordinadora Democrática y la organización civil “Súmate” organizaron la recolección de firmas necesarias para la promoción por vía refrendaria de diversas iniciativas, como una enmienda a la Constitución, un referendo abrogatorio de un paquete legislativo de más de 40 leyes, el referendo revocatorio presidencial, entre otros. El 20 de agosto de 2003 nuevamente las diversas agrupaciones del ámbito opositor presentaron ante el CNE las planillas contentivas de la manifestación de voluntad de más de 3,2 millones de electores (el mínimo requerido era 2,4 millones, equivalente al 20% de los electores inscritos en el registro electoral), soli-

14 Llama la atención que en este caso, a diferencia del referendo consultivo sindical, el pronunciamiento de la Sala Constitucional frente a las impugnaciones ejercidas en contra de la convocatoria del referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial, hiciera énfasis en el carácter no vinculante de resultado del mismo. La diferencia de criterio expresada entre ésta y la antes mencionada ponencia resalta más aun al constatar que se trata del mismo ponente en ambos casos, el magistrado Delgado Ocando. En el texto se afirma “En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional declara que el referendo consultivo previsto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, carece del carácter decisorio que el Texto Fundamental atribuye a los otros referendos populares. Ello significa que el referendo consultivo no es vinculante, es decir, que su resultado no sustituye la potestad decisoria de los órganos del Poder Público ni genera obligación alguna para que éstos las adopten. Así se declara” (TSJ-Sala Constitucional, 22.01.2003).

citando la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Esta iniciativa tampoco prosperó, puesto que en una decisión dividida (3 a favor y 2 en contra) adoptada el 12 de septiembre de 2003 por la Junta Directiva del CNE, el ente comicial rechazó la solicitud refrendaria, aduciendo el incumplimiento de “formalidades esenciales”, como la extemporaneidad de la recolección de las firmas y la falta de mención al CNE en el encabezado de las planillas contentivas de las firmas de los electores (CNE 2003a).

No obstante, los reveses vividos por la oposición en sus intentos por activar algún tipo de mecanismo comicial para producir una nueva correlación de fuerzas mediante el desplazamiento electoral del presidente de la República, la vía del referendo revocatorio siguió siendo la principal ruta escogida para desalojar al presidente Chávez del poder. El 26 de septiembre de 2003 el CNE aprobó las normas referidas a la celebración de los referendos (CNE 2003b). Para muchos analistas, políticos y juristas se trata de un reglamento que se aparta del espíritu de la Constitución, limita la participación, impone obstáculos artificiales a la realización de la consulta popular, extiende injustificadamente los lapsos y consagra una intervención indebida del CNE en fases pre-electorales, como la recolección de firmas para la solicitud del referendo. No obstante, estas reglas fueron acatadas por la oposición y sirvieron de pauta para articular un nuevo episodio en la búsqueda de una salida electoral a la conflictividad que caracteriza al país.

A inicios de octubre, nuevamente la Coordinadora Democrática solicitó ante el CNE la convocatoria de un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, y de un grupo de más 30 diputados del oficialismo. El organismo comicial estableció como fecha para la recolección de las firmas los días 28 de noviembre hasta el 1. de diciembre, en una jornada denominada por la oposición como el “Reafirmazo”. Esta jornada fue precedida por la iniciativa promovida por el oficialismo de recolección de firmas para solicitar la revocatoria de mandato de más de 30 diputados de oposición. Ambas jornadas contaron con la presencia de numerosos enviados de los medios de comunicación internacionales, y por representantes del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo a César Gaviria, secretario general del organismo hemisférico, en el evento opositor.

El 19 de septiembre de 2003 los sectores de oposición que promovieron la convocatoria de un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, consignaron ante el CNE la cifra de 3.467.050 firmas. De acuerdo con la Constitución la cifra mínima requerida es el 20% de los votantes inscritos en el registro electoral, equivalente a 2.452.179 electores. Luego de la verificación de las firmas recabadas, el CNE tuvo que pronunciarse acerca de la validez o no de la convocatoria del referendo revocatorio presidencial. Ya que la iniciativa prosperó, el CNE fijó la fecha del referendo que tendrá lugar en agosto de 2004.¹⁵

No obstante, el camino aun no está despejado, algunas reglas claves de este juego no están claramente definidas, como la participación de un presidente revocado o renunciante en un proceso comicial convocado para completar su período de gobierno y aun se debaten criterios para la verificación de firmas. Por otro lado, se prevé que durante el año 2004 deberán realizarse elecciones de gobernadores, acaldes y sus respectivas instancias legislativas, lo que podría complicar el cronograma electoral y afectar la realización oportuna del referendo. Los lapsos son estrechos, las condiciones sociopolíticas son complejas y aun se mantiene un fuerte control político del oficialismo sobre centros fundamentales de toma de decisiones como el TSJ y el CNE. Todo ello pudiera afectar la fluidez y oportunidad de la realización del referendo revocatorio, incluso habiéndose producido su convocatoria.

Por su parte el oficialismo ha manifestado claramente su falta de disposición a aceptar respetuosamente la decisión del organismo electoral, si la misma le resultara desfavorable. Aun antes de culminar la recolección de firmas ya anunciaban estruendosamente la ocurrencia de un “megafraude” durante esas jornadas, lo que prefigura una de las estrategias orientadas a bloquear el proceso introduciendo recursos y alegatos acerca de la supuesta distorsión de proceso.

Cabe destacar que los tres episodios de recaudación de firmas se convirtieron en importante estímulo a la articulación del esfuerzo opositor, al incremento de su capacidad organizativa y a la solidificación de su perfil democrático, en tanto se asociaban directamente a la búsqueda de vías electorales para cambiar la correlación de fuerzas exis-

¹⁵ El presente documento fue terminado antes del proceso comicial del referéndum revocatorio (El editor).

tentes. Los volúmenes de firmas recogidos durante los llamados “Firmazo” (2.02.2003) y “Reafirmazo” (28 de noviembre-1 de diciembre 2003) superaron los límites de votación obtenidos por la oposición desde diciembre de 1998. Si bien no se trata de cifras que puedan ser tomadas como valores absolutos, tanto porque no corresponden a una elección ni a un voto secreto y por tanto sub-representan el potencial de votación, como porque los datos brutos no incluyen la necesaria depuración de esas manifestaciones de voluntad, en la que puede haber solicitudes inválidas, revelan en otro plano el antes mencionado cambio en las preferencias colectivas y el incremento de la capacidad de convocatoria del liderazgo opositor.

5.2 Cambios en el ánimo colectivo y salida electoral

En la actualidad, los sondeos de opinión muestran que alrededor del 65-70% de la población evalúa negativamente la gestión del presidente, mientras que cerca de un 30-35% la apoya. Estos porcentajes se mantienen cuando la pregunta se refiere a la disposición de los electores a procurar la salida del presidente mediante un referendo revocatorio, donde aproximadamente un 70% se manifiesta a favor y un 30% en contra. Los mismos sondeos indican que la vía refrendaria es la preferida por aproximadamente el 80% de los electores, lo que incluye a una importante porción de quienes apoyan al gobierno actual.

La variada y exitosa experiencia electoral venezolana de las últimas décadas ha generado una expectativa colectiva acerca del uso del mecanismo electoral, en este caso del referendo revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución, para nuevamente adecuar las aspiraciones colectivas a la estructuración del poder político. Sin embargo, hay que destacar que la mayor parte de esa experiencia electoral transcurrió en el contexto de la llamada “democracia puntofijista”, que con todas sus limitaciones, funcionó sobre la base del respeto de las reglas del juego democrático y de la valoración del mecanismo electoral como fórmula privilegiada para dirimir las controversias societales. A su vez la experiencia comicial reciente de 1998 al año 2000 tuvo lugar en un ambiente favorable a los actuales ocupantes del poder, que hicieron un uso intensivo del mismo, cuando el ánimo colectivo le era abiertamente propicio. En ese sentido, llama la atención el contraste entre las enormes dificultades confrontadas hasta el pre-

sente y que presumiblemente podrán encontrarse en la ruta hacia el referendo revocatorio, y la relativa facilidad con la que se convocaron los 5 procesos comiciales ocurridos en el país entre 1999 y 2000.

Dado el carácter del proyecto político promovido por el presidente Chávez y sus aliados, y la evaluación de su estilo político y de gobierno después de cerca de 5 años de gobierno, luce improbable que estén dispuestos a abandonar el poder de manera pacífica, legal y democrática, como consecuencia de una nueva medición del ánimo colectivo mediante un próximo proceso comicial. Cuando el ánimo colectivo se tornó desfavorable a los actuales ocupantes del poder, las iniciativas electorales han sido sistemáticamente bloqueadas, contando con el control que aun ejercen sobre las palancas fundamentales de toma de decisiones en los poderes públicos. Se trata de unos actores políticos y de un proyecto cualitativamente diferentes a aquellos que guiaron la democracia venezolana desde 1958 hasta 1998. Para los actuales ocupantes del poder el compromiso con la democracia luce circunstancial y asociado a sus posibilidades de mantenerse en el poder.

5.3 Gobierno por y para el soberano o gobierno versus el soberano

Desde el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 se retomó la posibilidad de apelar al golpe de Estado para generar cambios rápidos y drásticos en la correlación de fuerzas, tal como se ha evidenciado con la glorificación oficialista de esa fecha, o con el rumbo que tomó la protesta cívica del 11 de abril de 2002 y que derivó en la usurpación del poder por parte de un pequeño grupo de civiles y militares. Pero también se ha materializado en algunos sectores en una visión utilitaria de los procesos electorales, que consideran que pueden ser una vía más eficaz para lograr lo que no puede obtenerse mediante un golpe, sin asumir un compromiso cabal con la democracia, sus procesos y sus instituciones.

La reciente dinámica sociopolítica del país, caracterizada por la confrontación y la tensión, ha estado marcada por esas tres tendencias:

- 1) la búsqueda de una adecuada correspondencia entre las preferencias colectivas y los esquemas de representación, a partir del compromiso sincero con las reglas del juego democrático y la promoción de procesos electorales confiables y equitativos;

- 2) el uso acomodaticio del mecanismo electoral, activado acomodaticamente según las circunstancias, para promover cambios o para proteger posiciones de poder;
- 3) la búsqueda del cambio de las correlaciones de fuerza existentes a través del recurso del golpe de Estado y la violación del estado de derecho.

Visto en una perspectiva de mediano plazo, la primera opción es claramente preferible a las otras y esa es la que sistemáticamente ha escogido la sociedad venezolana, aun en las condiciones adversas de Venezuela en las últimas décadas. No obstante, el proyecto sociopolítico que se ha intentado implantar en el país a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder, nació a partir de una intentona golpista y con una visión utilitaria de la vía electoral. Ante el fracaso de la vía golpista, las elecciones surgieron como un camino posible y conveniente, pero asumido sin el consecuente compromiso con las reglas del juego democrático y el respeto al pluralismo y al estado de derecho. Esa apelación a las elecciones no supuso la renuncia sincera a la posibilidad de acudir a fórmulas autoritarias y antidemocráticas para garantizar la permanencia en el poder, sobre todo cuando el ánimo colectivo se torna desfavorable. Del amor al soberano y sus expresiones electorales, parece haberse pasado al temor al soberano y a sus expresiones electorales.

En el desenvolvimiento de este nuevo capítulo del drama refrendario, sólo queda esperar que la coyuntura crítica que se avecina pueda ser abordada mediante prácticas democráticas y electorales, y que se produzca el ajuste deseado entre el ánimo colectivo y las autoridades y correlaciones de fuerzas desde donde se producen las decisiones que afectan al colectivo. Aun cuando el camino luce arduo, a lo largo de los años de la presidencia de Chávez se han fortalecido las barreras democráticas en contra de los intentos autoritarios de los actuales ocupantes del poder. En la solución que la sociedad venezolano logre para superar su intensa crisis política y de gobernabilidad, se pondrá a prueba el talante y la densidad democrática de la sociedad venezolana, y del carácter democrático de los actuales ocupantes del poder. Incluso será una oportunidad para poner a prueba la eficacia de la comunidad internacional para contener gobiernos autoritarios y para promover sociedades democráticas.

Bibliografía

- Álvarez, Ángel (ed.) (1996): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Caracas: Universidad Central de Venezuela/Instituto de Estudios Políticos.
- Blanco Muñoz, Agustín (1998): *Habla el comandante*. Caracas: Universidad Central de Venezuela/Fundación Cátedra Pío Tamayo, 3ra. Ed.
- Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.) (2001): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones/RedPol.
- Combellas, Ricardo (2001): *Derecho constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: McGraw-Hill Interamericana.
- CNE (Consejo Nacional Electoral), *Estadísticas electorales*, Varios años.
- (2003a): *Resolución No. 030912-461 Mediante la cual se declaró inadmisibile la solicitud de referendo revocatorio en contra del presidente de la República Hugo Chávez Frías*. Caracas: CNE, 12.09.2003.
- (2003b): *Resolución No. 030925-465 Normas para regular los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular*. Caracas: CNE, 26.09.2003.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* (1999).
- Garrido, Alberto (1999): *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela. Testimonios de Douglas Bravo, William Izarra, Francisco Prada*. Caracas: Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá.
- (2000): *Historia secreta de la revolución bolivariana. Conversaciones con Harold, Puerta Aponte y Camilo*. Mérida: Editorial Venezolana C. A.
- Hidalgo Trenado, Manuel (2002): “Liderazgo, reforma económica y cambio político en Venezuela, 1989-1998”. En: Ramos Jiménez, Alfredo (ed.): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, pp. 77-129.
- Keller, Alfred (2003): *Condiciones del escenario político de Venezuela*. Caracas: Alfredo Keller y Asociados (mimeo).
- Kornblith, Miriam (1998): *Venezuela en los noventa. Las crisis de la democracia*. Caracas: Ediciones IESA-UCV.
- (2001): “Confiabilidad y transparencia de las elecciones en Venezuela: examen de los comicios del 30 de julio de 2000”. En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones-RedPol, pp. 133-163.
- (2003a): “La tortuosa designación de los miembros del CNE”. En: *Debates IESA*, vol. 8, no. 4, pp. 49-56.
- (2003b): “Elecciones y representación en tiempos turbulentos”. En: Márquez, Patricia/Piñango, Ramón (eds.): *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 375-402.

- (2003c): “Del *Puntofijismo* a la *Quinta República*: elecciones y democracia en Venezuela”. En: *Revista Colombia Internacional*. Santafé de Bogotá: Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes No. 58 (julio-diciembre).
- Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política* (1998), República de Venezuela.
- Martínez Barahona, Elena (2002): “La formación de una nueva clase política en Venezuela: ¿un cambio para seguir igual?”. En: Ramos Jiménez, Alfredo (ed.): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, pp. 131-162.
- Molina Vega, José E. (2001): “Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad”. En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones-RedPol, pp. 188-213.
- Molina Vega, José E./Pérez Baralt, Carmen (1996): “Los procesos electorales y la evolución del sistema de partidos”. En: Álvarez, Ángel (ed.): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Venezuela: Universidad Central de Venezuela/Instituto de Estudios Políticos, pp. 193-238.
- Ramos Jiménez, Alfredo (ed.) (2002): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada.
- Ramos Rollón, Marisa (ed.) (2002): *Venezuela: Rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: PDVSA/Universidad de Salamanca.
- Rey, Juan Carlos (1989): *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: Colección IDEA.
- TSJ (Tribunal Suprema de Justicia) (2000): *Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad*. Caracas: Colección de Estudios Jurídicos TSJ.
- Viciano Pastor, Roberto/Martínez Dalmau, Rubén (2001): *Cambio político y proceso constituyente en Venezuela*. Caracas/Valencia: Vadell Hermanos Editores.